



LA EDICION

Portada
 RENTISMO
 Una trampa latente
 Un fiscal de hierro
 FUNDIDO
 ¡A san pedro!
 La Fuente de la Juventud
 En voz baja...
 TEOPONTE
 Sobrevivientes del ciclo
 guerrillero
 Patrimonio
 Viaje al pasado en tierra
 CUSQUEÑA
 Ternos
 para el hombre elegante
 VISITA
 de delegación de la
 Cancillería rusa
 DELICIOSA
 ensalada de calamares

EL PERIODICO

Roberto Laserna

RENTISMO

Una trampa latente

"No sé si el Gobierno está consciente del riesgo de manejar los millonarios recursos del gas con la actual debilidad institucional y el exacerbado corporativismo social"



"Vivimos un momento de alto riesgo para la democracia y el desarrollo. Si no se cambia el sistema de reparto de los recursos del gas, podemos caer, de nuevo, en el despilfarro, la corrupción, el prebendalismo y el clientelismo del pasado"

El gas traerá consigo una masa millonaria de recursos económicos para el Estado. La presión hacia el Gobierno por parte de diferentes frentes sociales por conseguir una renta de estos ingresos ya ha comenzado a sentirse. Al respecto, el economista Roberto Laserna ha esbozado un planteamiento para evitar caer en los mismos errores del pasado: despilfarro de dinero en las épocas de bonanza. Una propuesta que intenta darle base económica al concepto de ciudadanía y, según las estimaciones de este experto, lograr tasas de crecimiento anuales del 10 por ciento.

—¿Cómo explicar el lado negativo de la lógica rentista en Bolivia?

—Hoy vivimos un momento de alto riesgo en el país. Es que hay una larga tradición que ya está casi enraizada en nuestra cultura política. Y el rentismo nace porque el acceso a la riqueza ha sido siempre intermediado por el poder político. De modo que disfrutar de una parte de esos recursos, para la actividad económica o el consumo, ha dependido de la relación con el poder y el acceso a éste. Entonces, un comportamiento rentista significa que la gente, para poder acceder a los recursos económicos, tiene que desarrollar influencia y poder políticos. Esta lógica define de una manera muy particular las relaciones entre el Estado y la sociedad o los individuos. La trama económica siempre ha estado íntimamente relacionada con la disputa política.

—Con la reciente nacionalización del gas, ¿esto se vuelve más notorio?

—Esta tendencia es clara desde que el Estado asume el control de los recursos naturales, empezando por el proceso de los años 30 y 40 del siglo pasado y que culmina con la nacionalización de las minas, cuando comienza a asimilar los recursos y



La Paz - Bolivia Edición de noviembre 19, 2006

Frente a frente

excedentes. ¿En función de qué lo hace? No con base en planes racionalmente esbozados o con una propuesta de largo plazo. En la realidad, casi siempre lo hace en función de la presión, de las relaciones políticas y de la preservación del poder; y eso ha hecho que se generen y agudicen las iniquidades sociales. Ésta es una de las razones de que la mayor parte de los intentos de nacionalización de recursos no haya podido cumplir su oferta de resolver la pobreza y la desigualdad.

—Con el anuncio de los millonarios ingresos del gas, resurgen voces que presionan por una “tajada de la torta”.

—Son voces que saben que si uno no se organiza o no sale a las calles no va a tener acceso a los ingresos estatales. Los individuos por sí solos no tienen ninguna relevancia en Bolivia. Y eso ocurre cuando la propiedad de esos recursos está en duda, o sea, hay un tema de inseguridad jurídica y de debilidad institucional que es clave entender. Ése es uno de los factores que condicionan esto que llamo la “trampa del rentismo”. Otra causa es cuando se sabe que hay recursos y éstos se hallan concentrados en manos débiles que no los van a saber cuidar, como el Estado, que es vulnerable a la presión. Y, finalmente, cuando hay una gran desigualdad social. El problema es que el mecanismo (de reparto) actual excluye a los individuos y a los pobres, y estimula la presión para tener un acceso a la renta. Y en este momento, ése es el mayor riesgo para la democracia y el desarrollo.

—¿Usted percibe que el actual mandato de Evo Morales puede evitar esto?

—No sé si el Gobierno está consciente de las dificultades que entraña manejar esta gran cantidad de recursos con la actual debilidad institucional y el exacerbado corporativismo de la sociedad. Tiene confianza de hacer una asignación racional de los ingresos, incluso está hablando de industrializar el país. En otras palabras, quiere sustituir, con unas cuantas decisiones, las millones de decisiones de millones de individuos que hacen millones de transacciones cada día en la economía. En ninguna parte del mundo ha funcionado eso. Si el Ejecutivo no toma conciencia de esto, el riesgo de que volvamos a caer en el ciclo del despilfarro, la corrupción, la prebenda y la frustración es realmente muy alto. No he encontrado, hasta ahora, más que entusiasmo por el flujo de recursos, por la ilusión de que el dinero del gas resolverá los problemas. Pero, con el sistema de asignación de recursos y de concentración de los ingresos y el dinero, eso más bien nos va a agudizar los problemas.

—La presión por una renta energética proviene también de las regiones.

—Lo hacen en nombre de una sociedad que las apoya y que cree que así le llegarán los recursos. El dinero llegará a más gente, empero, no va a ser más eficiente por una razón: un Estado que vive de rentas, créditos o de la cooperación internacional no puede analizar el costo/beneficio, porque conseguir el dinero no le cuesta. Al contrario, ganar recursos y gastarlos es un rédito político. Entonces, ¿cómo sabe dónde invertirlos? Si la manera de asignarlos es viendo el mayor rédito, eso significa

mandarlos donde hay más presión, y así el dinero está condenado a ser ineficiente. Por eso digo que es inherente al sistema el no poder hacer una buena asignación de recursos, y eso vale para el Estado central, la Prefectura o la Alcaldía.

—¿Cuál es su planteamiento para no recaer en esta “trampa”?

—Es simple: para evitar el rentismo corporativo, distribuyamos el dinero a los ciudadanos, a todos por igual. Esto nos va a ayudar a crear una base económica a la condición ciudadana. Porque, hoy, ser ciudadano en Bolivia significa tener derechos, pero sin capacidad económica no se puede ejercerlos. Es difícil que haya democracia en esas condiciones. No digo quitarle todo al Estado central; una parte de la producción del gas y las minas seguirá siendo impuestos. Muchos países han ensayado dar base económica a la condición ciudadana: en Estados Unidos se lo hizo con la tierra, porque era abundante. En Bolivia, ¿cuál es el recurso abundante? ¿La tierra? Sólo el 2 por ciento del territorio es tierra cultivable, y distribuirla sería destinar una atadura, porque sólo se puede hacer agricultura, pastoreo y/o recolección. Nuestro recurso abundante es el gas, y monetizado es el dinero. ¿Por qué no darle dinero a la gente si le da poder, libertad y una base económica mínima?

—Pero con los recursos del gas ya se reparten bonos, como el Juancito Pinto.

—El bono Juancito Pinto es condicionado y excluyente, sólo para 1.200.000 niños. Es un paso en la línea correcta, pero creo que es muy delicado el tratar de convertir esta distribución en un mecanismo de imposiciones y de ingeniería social. Es mucho mejor decir que esto es parte de los derechos ciudadanos y que se le dé a uno la libertad de elegir. Los bonos son una respuesta parcial; empero, me parece que encierran una relación de dependencia, patrimonialismo y clientelismo en la relación Estado–sociedad y Estado–individuo, que termina por erosionar la libertad de las personas.

—Entonces, ¿cuál es la posible salida?

—Hay una experiencia muy eficiente en Bolivia: el Bonosol. Como éste, se debe apuntar a un sistema simple de entrega de recursos y que no transite por mecanismos de control burocráticos. Y, según mis cálculos, si se destinara un tercio de las exportaciones de los hidrocarburos en calidad de renta para su distribución a los ciudadanos, estaríamos hablando de una renta de entre 200 y 400 dólares anuales para cada uno. A partir de esto, he calculado que incluso podemos tener tasas de crecimiento promedio, en los próximos diez años, de alrededor del 10 por ciento. Si el ciudadano tuviera una renta de este tipo, que durara mientras haya gas —al menos 20 años— y que variara según el precio y los volúmenes de venta, así, éste puede prestarse, ahorrar, financiar su pensión de jubilación o invertir su dinero.

—¿Esta propuesta es universal?

—Lo ideal sería que fuera así, pero creo que es importante llenar el déficit de condición ciudadana. Por ello, propongo que la renta se reparta a partir de los 18 años, incluso

así se evitaría un riesgo, tonto y perverso —observación que se me hizo—, de premiar la natalidad. Si un ciudadano tiene derecho a votar a los 18 años, ¿por qué no darle la confianza de que sabrá hacer un uso razonable con su dinero? Y con esto se logrará reducir la desigualdad y también la pobreza. El gran riesgo está ahora en que le echemos dinero a una máquina que crea pobreza y desigualdad.

DE PERFIL

Es economista, egresado de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Actualmente es presidente de la Fundación Milenio e investigador de Ceres. Publicó libros como 20 juicios y prejuicios sobre coca y cocaína, El circuito coca cocaína y sus implicaciones, Productores de democracia o La democracia en el ch'enko y tuvo a su cargo la coordinación del informe Derechos humanos en Bolivia, publicado por el Defensor del Pueblo. También es profesor de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos.

© 2001 LA PRENSA - EDITORES ASOCIADOS S.A.

Derechos Reservados ®

Este sitio se ve mejor con Internet Explorer 4.0+

A una resolución de 800x600